

29 julio 2010



Otras políticas públicas son posibles y necesarias



Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar "la confianza de los mercados financieros", una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la

Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.

Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.

Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como "la fragilidad de la economía española" (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados "mercados financieros" dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos "es más austero" y "desregula más el mercado de trabajo". El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.

El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su

consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) **ver Informe**. Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.

La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.

Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las

exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS?

Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo "Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace". Sistema digital, 09.07.10).

El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se

debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en el sector privado.

En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.

EL ERROR DE LAS POLÍTICAS ACTUALES

La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras

razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.

Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.

Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo "No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE", Sistema Digital. 04.06.10) Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University